

audiencia del tercero interesado, se pusiese en claro el agravio de que se queja, y se decretase la enmienda por la autoridad competente.

Por tales fundamentos, de acuerdo con la opinion fiscal y en cumplimiento del artículo 13, penúltimo concepto de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se decreta: 1º: la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Sra. Petrona Castillo contra la providencia del C. Juez de 1ª instancia de la Sierra, que nombró al C. Miguel D. Estrada, curador de los menores Antonio y Laureana, que aquella dice nietos suyos. 2º: Sacadas las copias de estilo, elévense los autos á la Superior revision.

Lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su Escribano, que doy fé.—*L. Correa.*—Ante mí.—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Marzo 3 de 1874.—*Gabriel Sosa*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 24 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por Dª Petrona Castillo, ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tabasco, contra el Juzgado de 1ª instancia de la Sierra que nombró á D. Miguel D. de Estrada curador de los menores nietos de la quejosa; el informe del Juez responsable; el parecer fiscal, el fallo del inferior, y considerando: que siendo el Juez de 1ª instancia autoridad competente para hacer el nombramiento de curador, no ha habido propiamente violacion de una garantía individual, quedando expedita la accion de la quejosa para hacer cesar la usurpacion de sus legítimos derechos á la guarda de sus menores nietos.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios

legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que denegó el amparo á Dª Petrona Castillo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoria de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Iglesias.*—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda.* y *Nájera.*—*S. Guzman.*—*Luís Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Abril 9 de 1874.—*Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por los CC. Cleotilde Baqueiro, Rafael Bolio, I. Gamboa, diputados á la II. 5ª Legislatura del Estado, y el C. Lic. José Dionisio Gonzalez, contra los actos de una fraccion del mismo Cuerpo parlamentario, que se ha erigido en Gran Jurado para juzgar á los quejosos, con infraccion de los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Los CC. Cleotilde Baqueiro, Rafael Bolio é Ignacio Gamboa, diputados á la actual 5ª H. Legislatura de este Estado, y José Dionisio Gonzalez con el carácter de encargado que fué del Poder Ejecutivo del mismo, pretenden que la Justicia Nacional los ampare y proteja contra los actos de una fraccion del mismo Cuerpo parlamen-

tario, que habiéndose declarado por sí misma suficiente, en número de componentes, para constituir la propia Legislatura, ha nombrado una comisión del Gran Jurado en que se ha erigido, con el objeto de juzgar á los quejosos, á quienes efectivamente está juzgando según el edicto publicado en el ejemplar del periódico que acompañan á su ocurso, y con cuyo hecho creen conculcada en sus personas la garantía individual que otorga el artículo 14 de la Constitución federal, porque no siendo en principio, un Tribunal verdadero esa fracción del Congreso, y mucho menos la comisión que por ella ha sido nombrada, no puede decirse que se ha cumplido con la condición de estárseles juzgando por el tribunal que previamente haya establecido la ley, como exige el citado artículo. La Constitución de este Estado, dispone que para juzgar á los funcionarios de que se trata, el Congreso del mismo se erija en Gran Jurado debiendo estar presentes para formarlo, las dos terceras partes de los que lo componen, si sus determinaciones se consideran con el carácter de una ley ó decreto en el juicio respectivo, ó por lo menos la mitad y uno mas si se reputan como simples acuerdos, según los artículos 43, 88 y 89 del citado Código que el infrascrito acompaña. Ahora bien; el Congreso de Yucatan debe estar constituido en su totalidad por catorce diputados; y con doce propietarios de ellos fué real y solemnemente instalado el día 1º del mes próximo pasado, el que debe funcionar durante el periodo constitucional de este y el año entrante, como consta del acta impresa en el periódico oficial que el infrascrito adjunta también á este dictamen, para la mas plena justificación de los hechos que en el va consignando, y de las conclusiones que de ellos tiene que deducir. Pero por causas que á nada conduce explicar en este expediente, surgió un grave y escandaloso conflicto en el seno de ese H. Cuerpo, dando por resultado que su presidente el C. Clotilde Baquero, y los vocales CC.

Francisco Valencia, Ramon Albert Hernandez, Lázaro Pavia, I. Gamboa, Jose L. Moquel, Manuel Heredia Argüelles, Rafael Bolio y Evaristo Esquivel, signatarios de la protesta impresa en el adjunto periódico titulado "El Renacimiento," se hayan visto en la necesidad de seguir sus deliberaciones parlamentarias en otro distinto lugar del que el Estado señala á los legítimos representantes. Por esta segregación de la mayoría, pues nadie que siquiera tenga sentido común puede dudar que nueve diputados, es decir, ocho propietarios y un suplente, son mas que los cinco ó seis propietarios que debieran permanecer en el local ordinario de sus sesiones, quedaron estos en minoría tan ínfima, que no pudiendo tener ni el número de ocho que por lo menos es necesario, conforme al artículo 43 citado de la Constitución, siquiera para tener acuerdos, es incontrovertible que han carecido de absoluta facultad para acordar el llamamiento de los suplentes con que pretenden integrarse para constituir una Legislatura diversa de la que forman parte. El Fiscal, muy á pesar suyo, ha tenido que entrar en el análisis de esta delicadísima cuestión, porque solo de él podía resultar probada la incompetencia de los que se han erigido en Tribunal para juzgar á los actores del presente juicio; y puesto que con lo dicho queda evidentemente demostrada la incompetencia que sirve de principal fundamento á la queja, el fiscal apoyado en los artículos 11 y 16 de la Constitución federal, pide á V. falle en definitiva, que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Clotilde Baquero, I. Gamboa y Rafael Bolio, diputados propietarios á la II. 5ª Legislatura de este Estado, y Lic. José Dionisio Gonzalez, encargado del Poder Ejecutivo del mismo, contra los actos de la fracción de aquel Cuerpo que los está juzgando con evidente falta de jurisdicción, y sin que sobre este punto esencial, porque en el entra la queja, hayan dicho algo sólido en contrario los CC. diputados que constituyen el in-

forme con justificación, que les pidió V. en conformidad con el artículo 99 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1863.

Mérida, Febrero 6 de 1874.—*P. Hijuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatán. Mérida, Febrero 7 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por los CC. Clotilde Baquero, Rafael Bolio, I. Gamboa, diputados á la II. 5ª Legislatura del Estado, y el C. Lic. José Dionisio González encargado del Poder Ejecutivo hasta el 31 del mes próximo pasado, contra los actos de una fracción del mismo Cuerpo parlamentario que se ha erigido en Gran Jurado para juzgar á los quejosos, con infracción de los artículos 14 y 16 de la Constitución federal. Visto lo informado por la comisión nombrada por aquella fracción que se titula Gran Jurado; el pedimento fiscal; la citación para sentencia con cuanto mas ver y tener presente convino. Considerando: que en efecto en el periódico "La Razon del Pueblo" foja 1ª, aparece un edicto en que se llama á los actores de este juicio, diciéndose en él que se instruyen diligencias contra ellos por delitos comunes, aunque no se expresan cuales sean esos delitos. Considerando: que la Constitución particular del Estado, determina que para juzgar á los funcionarios de que se trata, conforme á los artículos 88 y 89, el Congreso debe erigirse en Gran Jurado, debiendo estar presentes mas de la mitad del número total de diputados que deban integrarlo, como previene el artículo 29. Considerando: que el Congreso de esta entidad federativa cuenta el número total de catorce diputados, y con doce propietarios fué real y solemnemente instalado el día 19 de Enero último, el que debe funcionar en el período constitucional de los años de 1874 y 1875, comprobado por el acta impresa en el pe-

riódico oficial de fojas 9. Considerando: que á consecuencia del golpe de Estado que dió el C. Coronel José Matilde Aleocer como encargado del Poder Ejecutivo el día 16 de dicho mes de Enero, el Presidente C. Clotilde Baquero y los vocales CC. Francisco Valencia, Ramon Albert Hernandez, Lázaro Pavia, I. Gamboa, José I. Moguel, Manuel Heredia Argüelles, Rafael Bolio y Evaristo Esquivel, signatarios de la protesta impresa en el periódico oficial "El Renacimiento" fojas 10. se vieron obligados á seguir las deliberaciones parlamentarias en otro distinto lugar del que el Estado señala á sus representantes legítimos. Considerando: que con esta separación de la mayoría de los diputados, es decir, ocho propietarios y un suplente de los tres que estaban en oficio, es claro que solo quedaron cinco en el local ordinario de sus sesiones, formando una minoría tan ínfima, que no tenían ni el número de ocho que es la mitad y uno mas que requiere el artículo 43 constitucional, para tener acuerdos económicos. Considerando: que por lo dicho, es incontrovertible que los referidos cinco diputados han carecido de absoluta facultad para acordar el llamamiento de los suplentes con que pretenden integrarse, á pesar de estar funcionando los propietarios, y constituir una Legislatura diversa de la que forman parte. Considerando: que por los mismos motivos, tampoco han podido desempeñar las funciones que los artículos 88 y 89 de la Constitución local designan al Congreso, facultándolo para erigirse en Gran Jurado y nombrando la comisión que instruya el expediente, cuando se trata de juzgar altos funcionarios como los actores, que gozan de fuero constitucional, violando por tanto en ellos las garantías de los artículos 14 y 16 de la Carta fundamental de la República, con el pretendido juicio á que se les llama por edicto, pues que los mentados cinco diputados no son ni pueden ser el tribunal previamente establecido por la ley para juzgarlos, ni la autoridad compe-

tente para molestarlos en sus personas &c.

Por lo expuesto, y de conformidad con el parecer fiscal, fundado en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal y fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla: 1º La Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. Cleotilde Baquero, I. Gamboa y Rafael Bolio, diputados propietarios á la II. 5ª Legislatura de este Estado, y C. Lic. José Dionisio Gonzalez, encargado que fué del Poder Ejecutivo del mismo, contra los actos de la fracción de aquel Cuerpo que los está juzgando con infracción de los referidos artículos 14 y 16 constitucionales. 2º Síguese testimonio de este fallo para publicar, y elevense los autos á la Corte Suprema de Justicia Nacional para su revision, como disponen los artículos 18 y 27 de la mencionada ley orgánica de amparo.

Notifíquese.—*I. Manzanilla.* Ante mí,
—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 25 de 1874.—Visto este recurso de amparo interpuesto por los CC. Cleotilde Baquero, Rafael Bolio, I. Gamboa, diputados á la 5ª Legislatura del Estado de Yucatan y el C. Dionisio Gonzalez como encargado del Poder Ejecutivo hasta el 31 de Enero próximo pasado, contra los actos de la minoría del mismo Cuerpo que se ha erigido en Gran Jurado para juzgar á los solicitantes, infringiendo así las garantías consignadas á los individuos en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal.

Visto el informe dado por una comision de esa misma minoría; el parecer fiscal; el fallo del Juez inferior otorgando el amparo solicitado; y

Considerando: que está probado que la II. Legislatura constitucional de Yucatan que debe funcionar en el bienio de 1874 y 1875, se instaló legítimamente el día 31 de

Diciembre del año próximo pasado, con doce diputados propietarios y un suplente, y con arreglo á lo prevenido en el artículo 21 de la Constitución local; que funcionó con este mismo número hasta el día 16 de Enero del presente año en que se separó de ella una minoría compuesta de cinco diputados; que ésta minoría apoyada en la fuerza y con infracción del artículo 48 de la citada Constitución del Estado, pretende juzgar á los diputados que solicitan el amparo y al C. Dionisio Gonzalez, consejero de gobierno, atribuyéndoles delitos contra la misma Constitución, contra la libertad y legalidad de las elecciones y sedicion, á cuyo efecto ha publicado edictos en que los llama, cita y emplaza, conminándoles con graves penas que especifica la comision de la minoría en su informe; que con estos hechos la repetida minoría ha violado las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Carta federal, pues aunque por los fundamentos expuestos la dicha minoría no constituye autoridad legítima, si ejerce un poder de hecho por el apoyo de la fuerza con que cuenta. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito del Estado de Yucatan que declara, que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. Cleotilde Baquero, Rafael Bolio, I. Gamboa y José Dionisio Gonzalez.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de la sentencia, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Iglesias.*—*Ogazon.*—*Farza.*—*Arteaga.*—*Ordáz.*—*Narváez.*—*Castañeda.*—*Altamirano.*—*Guzman.*—*Velasquez.*—*Zavala.*—*E. Landa*, secretario.

Es copia. México, Abril 15 de 1874.—*Emilio Ordáz*, oficial mayor.